



La
cuQuETA
de Luz
FORO DE REFLEXIÓN Y DEBATE

Conclusiones de las sesiones



Desde el Consello de Redolada de Zaragoza hemos trabajado para abrir espacios de análisis, reflexión y debate acerca de la situación política en nuestra comarca, en Aragón y en el resto del mundo, con especial incidencia en aquellos temas de interés ciudadano.

Es por esto por lo que pusimos en marcha un foro de reflexión y debate que llamamos **“La Cuqueta de Luz”**. Las luciérnagas son insectos laboriosos, que además, iluminan con su luz las noches en nuestra estepa. Nos pareció una metáfora muy llamativa para titular esta propuesta, que pretendía llegar en una primera fase (hasta el verano) a la militancia del partido, para abrirse al exterior en una segunda.

Fueron pequeños eventos con un formato fresco, novedoso y participativo, en los que reflexionar conjuntamente sobre varios temas de interés, para posteriormente elaborar entre todas y todos un discurso, estrategia y propuestas con las que poder orientar nuestra acción política. En cada uno de estos encuentros participaron compañeros y compañeras que trabajan o han trabajado, tanto profesionalmente como en el mundo del activismo, en los temas que queremos desarrollar.

Todos los encuentros tuvieron lugar a las 19 horas en la sede de CHA (calle Predicadores 28).

6 de febrero: Migraciones a debate.

Carmen Gallego, antropóloga y militante de CHA.

Ruth Orduz, contable y militante de CHA.

Gary Estrada, comunicador social y militante de CHA.

6 de marzo: Movilidad a debate.

Cristian Quílez, politólogo y experto en movilidad.

Chuaquín Bernal, Presidente de CHA-Zaragoza.

Ruth Pina, Secretaria de Discurso y Estrategia de CHA-Zaragoza.

27 de marzo: La participación a debate.

Ana Lasierra, Coordinadora de Lugar de CHA-Zaragoza

Raúl Gascón, activista del movimiento vecinal.

Ismael Tornos, Secretario de Movimientos Sociales de CHA-ZGZ.

25 de abril: La vivienda a debate.

Guillermo Corral, arquitecto urbanista.

Jorge Pueyo, secretario nacional de movimientos sociales de CHA.

Ana Lasierra, coordinadora de CHA-Zaragoza.

12 de junio: Convivencia en nuestros barrios a debate.

Belén Gimeno, miembro de Calles Dignas.

Alberto Alciane, trabajador social y educador de calle.

Mary Carmen Bozal, secretaria de comunicación de CHA-ZGZ.

Migraciones a debate

La sesión permitió constatar la ausencia de un modelo coherente de integración en el Estado español y la necesidad de impulsar desde Aragón un marco propio basado en la interculturalidad. La población migrada representa un factor de rejuvenecimiento demográfico y constituye ya una parte sustancial de la ciudadanía, lo que obliga a pasar de discursos utilitaristas a la plena garantía de derechos. La terminología también es clave: sustituir la etiqueta “inmigrante” por expresiones que reconozcan a las personas como sujetos de derecho y no como colectivos problemáticos.

Los testimonios recogidos evidencian los principales obstáculos en el proceso migratorio: trámites burocráticos lentos y costosos, estafas en la obtención de citas, racismo institucional, dificultades para el acceso a la vivienda y la homologación de títulos. Estas barreras limitan las oportunidades de integración real y generan frustración. Resulta imprescindible reforzar los servicios públicos especializados, como la Casa de las Culturas y el SAOI, y garantizar asesoría jurídica gratuita y accesible.

En el plano político, se coincidió en la urgencia de contrarrestar el discurso simplista y xenófobo de la extrema derecha con un relato propio, claro y emocional. La izquierda no puede limitarse a desmentir bulos con datos, sino que debe construir un mensaje positivo que sitúe la migración como un derecho humano, subraye las aportaciones sociales y económicas de las personas migradas, y defienda la igualdad de derechos sin matices.

Entre las propuestas estratégicas se destacan: impulsar la participación política de las personas migradas, incluyendo el derecho al voto en el ámbito municipal; facilitar vías de regularización y homologación de competencias profesionales; y abrir espacios de representación en listas y portavocías más allá del área migratoria. Al mismo tiempo, es necesario crear un equipo estable de acompañamiento en trámites y de atención política que actúe como referente.

La conclusión general es clara: frente a la instrumentalización de la migración como amenaza, debe articularse un proyecto político que la reconozca como parte constitutiva de la sociedad aragonesa. Esto exige voluntad institucional, refuerzo de los servicios públicos y un discurso firme, unitario y humanista capaz de disputar el terreno ideológico y social a las posiciones reaccionarias.

Movilidad a debate

La movilidad en Zaragoza enfrenta un cruce de caminos: o se continúa con la dinámica de decisiones improvisadas, parciales y ligadas a intereses empresariales, o se apuesta por una planificación integral que sitúe a las personas, la sostenibilidad y la justicia social en el centro. La reordenación de líneas de autobús, la extensión de la zona azul y la gestión del aparcamiento muestran cómo, en ausencia de participación vecinal y de una estrategia clara, se generan conflictos y desigualdades entre barrios, con efectos frontera y desorientación ciudadana.

La política de movilidad debe abordar simultáneamente varios retos: emergencia climática, calidad del aire, seguridad vial y equilibrio en el uso del espacio público. Ello implica redistribuir calles y plazas en favor de peatones, ciclistas y transporte colectivo, garantizando que el derecho a la movilidad no se confunda con el derecho a contaminar. Para que estas transformaciones no tengan un sesgo clasista, el transporte público debe ser asequible o gratuito, gestionado públicamente y financiado con mecanismos progresivos, evitando que los beneficios empresariales se antepongan a la calidad del servicio.

Experiencias como las supermanzanas, la peatonalización del Puente de Piedra o la implantación de zonas de bajas emisiones demuestran que las actuaciones urbanas solo funcionan si se aplican con consenso, medidas sociales de acompañamiento y visión de conjunto. No se trata solo de cerrar calles o instalar maceteros, sino de generar entornos de convivencia, comercio de proximidad y salud pública. La movilidad inclusiva también exige que los polígonos industriales y zonas periféricas dispongan de transporte colectivo eficaz, autobuses de empresa o infraestructuras seguras para bicicletas, evitando que el acceso al empleo quede supeditado a disponer de coche privado.

El horizonte político debe ser claro: un modelo metropolitano de movilidad sostenible, gestionado con criterios públicos y participativos, alineado con los compromisos europeos de descarbonización y con objetivos medibles hasta 2030. Zaragoza necesita recuperar la ambición de planificar tranvías, cercanías y una red ciclista interconectada, superando la improvisación y las concesiones al corto plazo. La ciudad del futuro se juega en estas decisiones, y renunciar a ellas es condenar a Zaragoza a la parálisis, la desigualdad y el deterioro ambiental.

La participación a debate

La participación ciudadana constituye un derecho democrático fundamental y una herramienta indispensable para construir políticas públicas eficaces, transparentes y legítimas. Sin embargo, la práctica muestra una brecha entre el marco legal existente y su aplicación real. Tanto en Zaragoza como en municipios del entorno, los espacios de consulta y deliberación existen en la normativa, pero los gobiernos de derechas y ultraderecha han optado por vaciarlos de contenido, limitar el acceso de la ciudadanía o directamente eliminarlos. Frente a ello, resulta clave reivindicar procesos deliberativos completos, con retorno de la administración y con impacto real en las decisiones presupuestarias y urbanísticas.

El movimiento vecinal es uno de los actores más sólidos para sostener esta participación. A lo largo de décadas ha demostrado capacidad de transformar barrios, impulsar equipamientos y generar cohesión social, pero hoy enfrenta un reto de regeneración: incorporar a personas jóvenes y nuevas formas de movilización. La tensión entre asociaciones tradicionales y plataformas espontáneas refleja la necesidad de combinar experiencia organizativa con dinamismo y frescura, evitando que las reivindicaciones se diluyan. Trabajar en red con ampas, asociaciones culturales y comerciantes fortalece el tejido comunitario y multiplica la capacidad de incidencia.

Los ejemplos de Cadrete y Zaragoza ilustran dos realidades complementarias: en un municipio pequeño, la participación solo avanza cuando hay voluntad política que la promueve; en la gran ciudad, los recursos normativos y técnicos existen, pero son deliberadamente bloqueados para neutralizar la voz de la ciudadanía. En ambos casos la conclusión es la misma: sin presión social y vecinal organizada, las instituciones tienden a replegarse sobre sí mismas, gobernando de espaldas a la gente.

CHA debe asumir la participación como un valor irrenunciable y como un eje estratégico de su acción política. Ello implica defender los presupuestos participativos, simplificar los procesos administrativos para hacerlos accesibles, garantizar el derecho a réplica en los órganos deliberativos y fomentar un modelo de democracia más directa y cotidiana. Frente a la derecha que reduce la participación a un trámite decorativo, debemos proponer una democracia viva en la que la ciudadanía, organizada o a título individual, sea protagonista de la toma de decisiones que afectan a su vida diaria.

La vivienda a debate

El acto comenzó señalando que la vivienda es hoy el principal problema para la ciudadanía y que no afecta solo a colectivos vulnerables, sino también a clases medias con dificultades para acceder a un hogar digno. Se destacó la diferencia entre vivienda social y vivienda asequible, así como la necesidad de ofrecer soluciones adaptadas a distintos contextos: grandes ciudades, áreas metropolitanas, zonas turisticadas como el Pirineo y pueblos rurales donde, en ocasiones, ni siquiera existe oferta en alquiler.

Guillermo Corral, arquitecto urbanista, insistió en que el problema central radica en el coste del suelo y en la plusvalía de los promotores privados, más que en el coste de construcción. Defendió la necesidad de planificar con visión de futuro, rehabilitar barrios envejecidos y explorar alternativas como la autopromoción y las cooperativas de vivienda, que permitirían ahorrar costes y frenar la especulación. También advirtió del riesgo de convertir parcelas dotacionales, pensadas para servicios públicos, en suelos residenciales, lo que debilita la planificación urbana.

Por su parte, Jorge Pueyo aportó datos sobre la dificultad de emancipación juvenil: el alquiler consume de media el 94% del salario de una persona joven y la compra exige un ahorro equivalente a 15 años de sueldo neto. Criticó la cultura especulativa que ve la vivienda como inversión segura, frente a la necesidad de garantizar su función social. Subrayó que la temporalidad laboral también ha empujado a muchos jóvenes a prolongar su vida de alquiler y que el problema de la vivienda es transversal, no solo juvenil.

En el debate se abordó la regulación de los alquileres y el efecto de las viviendas turísticas. Se reconoció que los topes de precios pueden aliviar a corto plazo, pero generan riesgos de que la oferta se desplace al alquiler de temporada o a la compraventa. Frente a esta limitación, se defendió la necesidad de que las administraciones públicas aumenten la oferta de vivienda en alquiler social y gestionen de manera directa su patrimonio, asegurando precios justos y evitando que todo dependa de la especulación privada.

Finalmente, se destacó la importancia de pensar la vivienda como parte de un proyecto de comunidad: rehabilitar barrios envejecidos, crear viviendas intergeneracionales, garantizar servicios públicos y recuperar el sentido de vecindad. La apuesta pasa por combinar tres vías —compra, alquiler y autopromoción—, fomentar la mezcla social y generacional en los barrios y asegurar que la vivienda cumpla con su función de derecho fundamental y no de mercancía.

Convivencia en nuestros barrios a debate

La sesión abordó la convivencia en los barrios desde una doble mirada: la percepción externa que suele asociarse a estigmas y etiquetas, y la realidad interna vivida por el vecindario. A través de materiales audiovisuales y testimonios, se mostró cómo barrios como La Jota, Oliver o Zamoray-Pignatelli sufren prejuicios que no siempre reflejan la vida cotidiana, marcada tanto por dificultades objetivas como por una gran vitalidad comunitaria y tejido asociativo.

El análisis subrayó que los problemas de convivencia están directamente relacionados con cuestiones estructurales: la falta de inversión pública, la precariedad habitacional, la ausencia de servicios sociales suficientes y el déficit en infraestructuras urbanas y educativas. Lejos de ser “barrios conflictivos” en sí mismos, son territorios que padecen abandono institucional y desigualdades acumuladas, lo que refuerza la percepción negativa desde fuera.

En el plano político, se señalaron como herramientas útiles los Planes Integrales (PICH en el Casco Histórico y PIBO en Oliver), que han demostrado capacidad de mejora, aunque requieren continuidad, financiación estable y voluntad real de coordinación interinstitucional. El llamado Plan Zamoray-Pignatelli fue criticado por nacer sin presupuesto suficiente, lo que lo convierte en una mera declaración de intenciones sin capacidad transformadora.

Las propuestas giraron en torno a la necesidad de actuar de manera integral: garantizar vivienda digna y rehabilitación urbana, mejorar la movilidad interna y la conexión con el resto de la ciudad, reforzar la seguridad ciudadana desde una perspectiva de convivencia y no de control policial, y apostar por servicios sociales que acompañen a las familias en situación vulnerable. También se insistió en la educación, denunciando la existencia de “colegios gueto” y defendiendo proyectos inclusivos para la infancia y la juventud que fortalezcan la igualdad de oportunidades.

El debate con el público reforzó la idea de que la convivencia no se construye desde arriba, sino a partir de la participación activa del vecindario y del reconocimiento de su esfuerzo cotidiano. Las políticas deben ser corresponsables y sostenidas en el tiempo, con presupuestos claros y objetivos medibles. Se concluyó que dignificar los barrios es una cuestión de justicia social y de cohesión ciudadana, y que Aragón necesita un modelo urbano que combata la desigualdad territorial y garantice que todas las personas, vivan donde vivan, disfruten de los mismos derechos y oportunidades.